

## **Respuestas organizativas de la sociedad**

Durante el período, distintos grupos sociales siguieron desarrollando movilizaciones, reflejándose sin embargo, cambios importantes en sus características con relación a los períodos analizados en los dos informes anteriores. Como resultado del referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004, la lucha hegemónica vivida en el país en los años previos, parece haber cedido en su intensidad. Si bien el número de manifestaciones registradas sigue siendo elevado –incluso superior a las del período anterior–, la naturaleza y motivaciones de estas protestas dieron un viraje significativo. Tanto en términos absolutos como porcentuales, la violencia en las protestas disminuyó con respecto a los dos períodos previos, y en las motivaciones de quienes ejercieron su derecho a protestar privaron más las reivindicaciones de carácter socioeconómico que las demandas de naturaleza política o civil.

Como lo hemos señalado en anteriores oportunidades, desde el inicio del presente gobierno, la movilización, participación y organización de los más diversos sectores sociales ha sido intensa, convirtiéndose la *política de la calle* en uno de los recursos más dinámicos de la actividad política nacional, utilizado además por todos los actores. Desde el gobierno, con la promoción sostenida de la “*democracia participativa y protagónica*”, explícita en diversos programas y “*misiones*” sociales y económicas, se estimula la organización y movilización de muy diversos sectores sociales, tendencia que durante el período de este Informe se ha profundizado. Por su parte, también desde sectores opositores del gobierno ha sido intenso el uso de la movilización de calle para adelantar y promover sus agendas políticas.

El Cuadro N° 1 recoge el número de acciones colectivas de protesta registradas durante los años de gobierno de Chávez. Se observa la alta frecuencia de las mismas, que promedia más de 3,56 diarias, incluyendo en el cálculo de ese promedio todos los fines de semana, vacaciones y días festivos. Para el período

de este Informe, fueron registradas 1.534 acciones de protesta, 279 adicionales a las registradas en el período anterior, promediando más de 4 diarias.

**Cuadro N° 1:**  
**Acciones pacíficas y violentas**  
**Octubre de 1998 a septiembre de 2005**

Período	Acciones de Protesta	Promedio diario	Pacíficas		Violentas	
				%		%
98-99	855	2,34	805	94,15	50	5,85
99-00	1.414	3,87	1.263	89,32	151	10,68
00-01	1.312	3,59	1.169	89,10	143	10,90
01-02	1.262	3,46	1.141	90,41	121	9,59
02-03	1.543	4,23	1.243	80,56	300	19,44
03-04	1.255	3,44	1.037	82,63	218	17,37
04-05	1.534	4,20	1.417	92,37	117	7,62
<b>Total</b>	<b>9.166</b>	<b>3,56</b>	<b>8.075</b>	<b>88,09</b>	<b>1.100</b>	<b>12,00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de Provea (1998 – 2005).

El Cuadro N° 1 también revela que, a diferencia de los dos períodos anteriores, las acciones de naturaleza violenta disminuyeron notablemente, para colocarse en 117 acciones, es decir el 7,62% de todas las protestas registradas. Este porcentaje es inferior al promedio de los períodos correspondientes al gobierno de Chávez y vuelve a ubicarse en cifras de un dígito, como al comienzo de la serie. Esta cifra parece indicar que aquellos actores que, en períodos anteriores, venían haciendo uso de la violencia en la política de la calle en procura de sus objetivos, comienzan a perder terreno. Asimismo, la disminución de la represión a las manifestaciones pacíficas registradas en el presente lapso (18 manifestaciones

reprimidas de un total de 1.417 manifestaciones de carácter pacífico)<sup>1</sup>, contribuye también a explicar las causas de la reducción en las cifras de acciones violentas.

Sin embargo, hubo casos de protestas violentas en las que, si bien el Estado tenía la potestad de hacer uso de una violencia proporcional y acotada por la preservación de la vida e integridad de las personas para controlarlas, se presentaron excesos policiales, con fatales saldos. El 08.12.04, buhoneros del centro de Caracas manifestaron violentamente en rechazo al desalojo de sus puestos de venta y decomiso de sus mercancías que realizaron funcionarios de la Policía del Municipio Libertador (Policaracas). Los manifestantes dispararon cohetes navideños, quemaron dos autobuses, una moto de Policaracas y saquearon un almacén, lo que originó una situación de caos general en el centro de la ciudad. Estudiantes de los liceos Fermín Toro, Teresa Carreño y Antonio Arráiz se unieron a la protesta. Además de Policaracas, intervinieron la Policía Metropolitana y la GN. Las protestas, que se iniciaron desde primeras horas de la mañana, solo pudieron ser controladas hacia la 4 de la tarde. Durante estas acciones, al menos 53 personas resultaron heridas. De los heridos, 18 recibieron impactos de bala, 4 de ellos eran niños, quienes presentaron disparos en la espalda o en las piernas, mientras 4 adultos resultaron con disparos en la cabeza. Uno de los heridos, Isaías MÉNDEZ (25), murió luego, sin que se conozca al cierre de este Informe la autoría del disparo. También resultaron lesionados 11 funcionarios de Policaracas y 2 Guardias Nacionales. El director de Policaracas reconoció que algunos efectivos desenfundaron e hicieron uso de sus pistolas o revólveres. El Alcalde Bernal destituyó al presidente de Instituto de Seguridad y Transporte por los excesos y falta de control durante los hechos<sup>2</sup>.

### **La política de la calle y sus actores**

---

<sup>1</sup> Esta cifra representa un 1,3% de manifestaciones reprimidas. Para más información ver en este mismo Informe el capítulo Derecho a la Manifestación Pacífica.

<sup>2</sup> Panorama, 09.12.04, Pág. 2-14; El Universal, 09.12.04, Pág. 2-18; El Nacional, 09.12.04, Págs. B-23 y B última; El Universal, 10.12.04, Pág. 1-2; Últimas Noticias, 10.12.04, Pág.2; El Nacional, 10.12.04, Pág. B-16.

En este período fueron los vecinos los protagonistas del mayor número de protestas. Del total de 1.534, participaron en 362, lo que representa el 23,5%. Sin embargo, de las 117 acciones violentas registradas, los vecinos participaron en 10 de ellas, es decir, de todas sus acciones, solamente el 2,7% fue violenta, lo que equivale a 1 de cada 36 protestas.

En segundo lugar están los trabajadores, que en conjunto participaron en 300 protestas, lo que representa el 19,5% del total de protestas de este período. Seis (6) de estas protestas fueron violentas. Nuevamente fueron especialmente activos los trabajadores del sector salud, pues organizaron 49 de estas 300 acciones.

Los estudiantes de todos los niveles se ubicaron en el tercer lugar como actor más movilizado, con 209 acciones de protesta; es decir, el 13,6% del total de movilizaciones. De estas, 55 fueron violentas, es decir, 1 de cada 4 protestas, o el 26,3% del total de acciones que protagonizaron. Persisten los estudiantes en ser protagonistas principales de las protestas violentas, al realizar el 47% de las registradas. Durante el período anterior compartieron el primer lugar con los opositores al gobierno. En el período cubierto por este Informe, los estudiantes universitarios fueron, de todos los estudiantes, tanto los más movilizados, con 126 protestas, como los más violentos, con 35. Si a las movilizaciones de los estudiantes sumamos las de otros actores del sector –educadores, trabajadores de educación y padres y representantes– el número de protestas alcanza a 273, lo que ubica a los grupos del sector educativo, como lo ha sido tradicionalmente, entre los más activos en las manifestaciones de calle.

Los desempleados protagonizaron 130 acciones de protesta, ubicándose en el cuarto lugar entre los actores que mayormente protestaron (8,4% del total de protestas), de estas, 4 fueron violentas (5%). La principal demanda de este sector fue la solicitud de cupos de empleo en el sector de la construcción y en el sector petrolero.

Con 84 protestas, los reclusos en centros penitenciarios y detenidos en calabozos policiales o militares ocupan el quinto lugar, con el 5,4% de todas las protestas. Protagonizaron 18 protestas violentas, el 15,3% del total de acciones violentas registradas. Siguen los transportistas y choferes con 58 protestas, 43,8% del total y ninguna de ellas violentas. Grupos y sectores de oposición al gobierno bajaron, de ser los más movilizadas a lo largo del período anterior con 269 protestas<sup>3</sup>, a la sexta posición con 48 movilizaciones, el 3,2% del total. Es de resaltar que el número de acciones violentas en la que participaron estos actores también se redujo sustancialmente. Mientras que en el informe del período anterior para los opositores al gobierno se registraron 98 acciones violentas<sup>4</sup>, para este período solo se registran 2, lo que representa una participación porcentual de 1,97% en el total de acciones violentas. Los sectores simpatizantes del gobierno ocupan el séptimo lugar al protagonizar 47 movilizaciones, el 3,21%, siendo 6 de ellas acciones violentas, el 5,61% de las violentas. Se registran, además de las ya contabilizadas, 3 enfrentamientos violentos entre opositores y simpatizantes del gobierno. Los tres enfrentamientos se produjeron en distintas regiones del país al siguiente día de las elecciones de alcaldes y gobernadores del 31.10.04. En los hechos se accionaron armas de fuego con saldos de dos fallecimientos y al menos 16 heridos<sup>5</sup>.

En octavo lugar, los damnificados de distintos estados del país registraron 39 movilizaciones (2,5% del total de manifestaciones), de las cuales 2 fueron violentas. Los adultos mayores, junto a los jubilados y pensionados participaron en 28 movilizaciones (1,8%), todas de carácter pacífico. Los trabajadores del sector informal (buhoneros) en 24 (1,5%), 2 de ellas violentas. Luego encontramos a los familiares de reclusos con 18 acciones colectivas (1,2%), 1 violenta. Las víctimas de la delincuencia y sus familiares y agentes de diferentes cuerpos policiales participaron, cada uno, en 13 protestas (0,9%). Igual número de manifestaciones promovieron comunidades indígenas. Por su parte, las víctimas de abu-

---

<sup>3</sup> Ver PROVEA: Informe Anual 2003-2004, Caracas, 2004. Pág. 487.

<sup>4</sup> Ídem.

<sup>5</sup> El Mundo, 2.11.04, págs. 24 y 25.

sos policiales y sus familiares manifestaron en 10 oportunidades. Los usuarios de servicios de salud protestaron en 9 ocasiones, hubo 6 movilizaciones campesinas, 5 de organizaciones de mujeres y 4 de cooperativistas. Las acciones colectivas de protesta restantes fueron impulsadas por otros actores como discapacitados, organizaciones de homosexuales, grupos religiosos, deportistas, jóvenes con problemas de consumo de droga, organizaciones de defensa de derechos humanos, etc.

El recurso de la violencia por parte de actores políticos, que en años recientes fue muy intenso, se redujo notablemente en este período, por lo cual la distribución porcentual vuelve a responder a un patrón tradicional en Venezuela. La vuelta de los estudiantes al lugar más activo en las protestas violentas, a distancia de cualquier otro actor, reitera la difícil relación entre este actor y las instituciones del Estado. Varios factores contribuyen a explicar la persistencia de esta situación: una historia de acciones represivas condiciona a los participantes en sus acciones de calle y su condición de jóvenes le agrega un componente pasional. Los problemas no resueltos de los centros penitenciarios en el país y el poco reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, así como los de sus familiares, explican, entre otros, la condición de segundo actor más violento de los reclusos y detenidos.

### **La política de la calle y su repertorio**

La forma de acción de protesta más utilizada continuó siendo el cierre de calle, incrementándose su número de manera sustancial. De los 370<sup>6</sup> cierres registrados en el período anterior, se pasó ahora a 526 (42,2% de incremento) lo que representa el 34,3% del total de protestas. Esta es una forma de protesta que, como ya hemos señalado en informes previos, es claramente confrontacional, entendiéndose por ello una modalidad que, pudiendo ser pacífica, tiene una alta capacidad disruptiva de la vida cotidiana y, por ello, suele tener mucho poder de impacto y producir amplia agitación sociopolítica. Ya se mencionó en el capítulo correspondiente al derecho a la manifestación pacífica, nuestra alarma y recha-

---

<sup>6</sup> Ver PROVEA: Op. cit. Pág. 488.

zo porque la Asamblea Nacional (AN) haya aprobado en marzo de 2005 una reforma al Código Penal que establece en el artículo 357 modificado, castigo con penas de 4 a 8 años para quien cierre vías<sup>7</sup>. Esa modificación en el Código está dirigida a constreñir el uso de un recurso de protesta que se ha mantenido como el más usado del repertorio de modalidades de protesta en Venezuela, llevando al terreno judicial un problema de carácter político e institucional. De los 526 cierres de calle registrados, 21 fueron violentos (1 de cada 25). Como señalan actores que participan en esta modalidad de protesta, se recurre a ella cuando han sido ya agotadas otras formas menos confrontacionales de movilización y las instituciones no han oído sus reclamos<sup>8</sup>. Más que crear nuevos instrumentos para la represión de estas acciones, los cuales suelen tener escasos resultados, el Estado debería concentrarse en crear, abrir y vitalizar espacios institucionales para procesar efectivamente y con menos conflictividad las demandas de la sociedad.

Repitiendo también lo registrado en los períodos anteriores, la segunda modalidad de movilización más usada en la política de calle fue la concentración. A diferencia de los cierres de calle, esta forma suele ser, además de pacífica, más convencional. Para el período de este Informe, de las 442 concentraciones registradas, es decir el 28,8% de la totalidad, sólo 5 de ellas fueron violentas.

La toma de establecimientos ocupó en este período el tercer lugar de frecuencia con 129 acciones de este tipo, es decir, el 8,4%, siendo 6 de ellas violentas. Hubo un salto en el número de huelgas de hambre registradas, al pasar de 40<sup>9</sup> a 114, el 7,14% del total. Aunque esta modalidad de protesta sigue siendo principalmente usada por los reclusos y detenidos (64), dadas las limitadas opciones de que disponen, fue también utilizada por otros actores como los trabajadores (20) y los desempleados (10). Este número de huelgas de hambre es más del doble de las contabilizadas en el período anterior. Al igual que los cierres de ca-

---

<sup>7</sup> Gaceta Oficial N° 5.763, 16.03.05.

<sup>8</sup> LÓPEZ MAYA, Margarita et al: Protesta y Cultura en Venezuela. Clacso-Asdi, Buenos Aires, 2002. Pág. 157.

<sup>9</sup> Ver PROVEA: op. cit. Pág. 488.

lle, esta es una modalidad extrema a la que recurren los actores por su indefensión ante instituciones públicas o privadas en el reclamo de demandas.

Otra forma de protesta más convencional, las marchas, ocupan la quinta posición, registrándose 88, el 5,7%. Del total de marchas, 1 fue violenta y otra fue obstaculizada por funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), quienes impidieron que llegara al lugar inicialmente programado, mientras afectos al gobierno del Presidente Chávez arremetieron contra un grupo de los manifestantes que marcharon lanzando piedras contra éstos. Finalmente, en el período se registraron 80 huelgas o paros laborales (5,2%).

Como ya se señaló, hubo en este período una disminución significativa de las manifestaciones violentas. Incluimos dentro de esta modalidad de protesta a las quemaduras, saqueos, enfrentamientos, agresiones, autoflagelaciones, etc. Como hemos ya dicho en otros informes, es posible que durante otras formas de protesta y movilización como los cierres de calle, concentraciones o marchas, ocurran hechos de violencia, que no las hacen violentas *per se* y por lo tanto no las contabilizamos como tal. Las manifestaciones violentas descienden al séptimo lugar de frecuencia, lo cual podría estar indicando un apaciguamiento del clima de conflictividad social y política vivida en la sociedad venezolana en los años recientes. Se registraron 67 (como está explicado en las líneas anteriores, un cierre de calle violento se contabiliza, cuando hablamos del repertorio, como cierre de calle y no como acción violenta) acciones colectivas de este tipo, lo que representa 4,4% del total. Si comparamos este registro con el del período previo, que fue de 169<sup>10</sup>, vemos la pronunciada disminución en el uso de este tipo de acciones. A esta modalidad le siguieron las caravanas, con 16 registradas, es decir, el 1%, lo que representa una disminución en el uso de esta modalidad en comparación al período pasado, cuando representaron el 1,6%<sup>11</sup>. Fueron también registrados 13 secuestros de personas (0,8%). En el resto de las movilizaciones se implementaron modalidades como los encadenamientos, las vigiliadas, quema de monigotes, toma simbólica de terreno, secuestro de vehículos o ma-

---

<sup>10</sup> *Ibíd.* Pág. 488.

<sup>11</sup> *Ibíd.* Pág. 469.

quinarias, etc. Es de destacar que en este período solo se registraron 4 cacero-lazos, lo que reafirma la tendencia a su disminución iniciada en el período anterior cuando de 67 habían bajado a 15<sup>12</sup>.

### **La política de la calle y sus motivaciones**

Las movilizaciones por reclamos de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) superan en una proporción de casi 3 a 1 las motivadas por demandas de derechos civiles y políticos (DCP). En el período previo, aunque también predominaron las movilizaciones de demandas por DESC frente a las de DCP, la diferencia entre ambas fue mucho menor. Para las primeras, el porcentaje fue de 53,8% y para las segundas 42,7%, correspondiendo el 3,5% restante a movilizaciones de motivación desconocida<sup>13</sup>. Para el período de este Informe hubo 1.147 movilizaciones demandando DESC, el 74,8% de la totalidad de acciones colectivas de protesta. Por su parte, las protestas exigiendo DCP sumaron 325, es decir, el 21,2% del total. No hay información de la motivación de las 62 (4%) protestas restantes.

En períodos anteriores a 2001-2002, las protestas motivadas por DCP rondaban el 10% del total de movilizaciones de protesta. A partir de ese período subieron al 30% y en los dos Informes previos saltaron a 45,6% y 42,7% del total. En el período correspondiente a este Informe ese porcentaje bajó, como ya señalamos, a 21,2%. Las cifras actuales podrían estar indicando una mengua en la turbulencia sociopolítica que ha vivido nuestra sociedad y una disminución de la intensidad de la lucha hegemónica, que de todas formas no parece todavía plenamente resuelta.

### ***Exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales (DESC)***

---

<sup>12</sup> *Ibíd.* Pág. 489.

<sup>13</sup> *Ídem.*

Al igual que en períodos anteriores, las acciones colectivas de protesta motivadas por derechos laborales –sueldos, trabajo, discusión de nuevos contratos, respeto a contratos vigentes, despidos, etc.– son las predominantes. Se registraron 494, lo que representa el 43,1% de todas las agrupadas en el rubro de los DESC y el 32,2% del total general. Entre estos derechos, los que tienen que ver con condiciones generales de trabajo motivaron 256 movilizaciones; sueldos, en el sentido más amplio, 181; luchas contra los despidos, 34; y firma y cumplimiento de contratos colectivos, 23. Ejemplo de una protesta con estas motivaciones fue la concentración realizada el 03.03.05, en Caracas, por trabajadores de los 14 hospitales y 83 ambulatorios adscritos a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana, para exigir el pago de deudas pendientes que, según declararon, ascienden a los 450 millardos de bolívares. El presidente del Sindicato de Hospitales y Clínicas, Pablo Zambrano, informó que también existen graves denuncias en los distintos centros de salud sobre atropellos por parte de representantes de las Contralorías Sociales y expresó que "*Hay politización del servicio*"<sup>14</sup>. Zambrano resaltó que en diciembre pasado se aprobó un crédito adicional de Bs. 75 millardos y "*ni siquiera nos dieron los juguetes para nuestros hijos*"<sup>15</sup>.

El derecho a la vivienda motivó la realización de 260 acciones de protesta. Destacan entre las principales demandas, la asignación de viviendas dignas, mejoras en la vialidad, la dotación de servicio eléctrico, las fallas en el servicio de transporte, el pago de indemnizaciones por viviendas afectadas por desastres naturales y el rechazo a los desalojos. Igualmente se registraron 85 protestas que relacionan el derecho a la vivienda y el derecho a la salud; la principal demanda fue la dotación de agua potable (43), seguida de la reparación del sistema de aguas negras (29) y en menor cuantía la recolección de basura (13).

Las demandas relacionadas con el derecho a la educación también motivaron acciones colectivas de protesta. Igual que en períodos anteriores, el derecho al estudio, mejor dotación, reparación o ampliación de planta física, cupos, becas,

<sup>14</sup> Últimas Noticias, 04.03.2005, pág. 2.

<sup>15</sup> Idem.

reformas educativas, nombramiento o destitución de autoridades educativas, rechazo al cierre de locales o la construcción de nuevos planteles, autonomía, etc., fueron los principales motivos de las protestas. En el período correspondiente a este Informe se efectuaron 206, el 18% de todas las agrupadas en el rubro de los DESC y el 13,4% del total general.

El derecho a la seguridad social motivó la realización de 34 protestas (3% del total por DESC). La prestación de servicios de salud fue la motivación de 31 acciones de protesta, la mayoría de ellas por solicitud de dotación de insumos y personal en diferentes centros asistenciales del país y en menor medida por el rechazo a la aprobación en primera discusión de la nueva Ley de Salud, por parte de la Asamblea Nacional.

El derecho a un ambiente sano impulsó la realización de 13 protestas y el derecho a la tierra 6.

### ***Exigibilidad de derechos civiles y políticos (DCP)***

Tal como ya se ha dicho, las acciones colectivas de protesta motivadas por DCP registraron para este período un descenso, tanto en términos absolutos como porcentuales, al bajar de 536 a 325 protestas, y los porcentajes con respecto al total de protestas registrado, de 42,7% a 21,2%. Dado que la mayor disminución se presenta en las manifestaciones de carácter estrictamente político, se puede afirmar que si esta tendencia se mantiene en años venideros, podríamos estar ante el inicio de una disminución en los niveles de confrontación y polarización política que hemos vivido en años recientes.

A diferencia del período anterior, el porcentaje de las protestas por motivos estrictamente políticos es bastante bajo. Se registraron 46 protestas políticamente motivadas, lo que representa el 14,6% de las protestas por DCP, mientras que en el Informe anterior, ese porcentaje alcanzó 54,9%<sup>16</sup>. Vale destacar como aspecto positivo que, también a diferencia del período previo, de las protestas por

---

<sup>16</sup> Ver PROVEA: Op.cit. Pág. 492.

motivos estrictamente políticos, solo 7 de ellas fueron violentas. Una de ellas ocurrió cuando un grupo de afectos al gobierno del presidente Chávez realizó una concentración en la Plaza Venezuela de Caracas para conmemorar el “Día de la Resistencia Indígena” y protestar por la “*invasión española*”. Durante la concentración, un grupo reducido atacó la estatua de Cristóbal Colón que se encontraba en el paseo Colón en esa misma Plaza tumbándola y arrastrándola a la calle. En su pedestal pintaron consignas: “*Juicio a Colón*”, “*la Resistencia Sigue*”, “*Colón igual a Bush*”<sup>17</sup>. En el período anterior, de todas las protestas por motivos políticos, 37,8% de ellas fueron acciones violentas, mientras que en el presente, sólo 15,2% lo fueron.

Entre las protestas por DCP, las que motivaron mayor número de movilizaciones fueron las que reclamaban el derecho a la justicia, registrándose 159, es decir, 48,9% del total de manifestaciones por DCP, y 10,4% del total. De estas, 94 (59,1%), estuvieron relacionadas con los derechos de las personas detenidas o encarceladas. Entre las principales demandas de los reclusos se encuentra la celeridad procesal, la declaración de la emergencia carcelaria y la aplicación de beneficios procesales.

Ejemplo de estas protestas fue la realizada en mayo de 2005 por un grupo de aproximadamente 300 familiares de los reclusos del Internado Judicial de Oriente “La Pica”, en el Edo. Monagas, quienes decidieron permanecer dentro del penal en solidaridad con las demandas que expresaron los reclusos durante una anterior huelga de hambre. Entre esas peticiones se encontró la celeridad procesal y el cese a los maltratos por parte de los custodios. La situación de “auto-secuestro” de los familiares se mantuvo en La Pica por 11 días. El Tte. Coronel Erling Rojas, director de Rehabilitación y Custodia, informó que las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) estuvieron negociando la salida del penal de 58 niños y algunas personas adultas mayores que requerían tratamientos especiales. Luego de la mediación entre el MIJ, la Defensoría del Pueblo y demás miembros de la mesa técnica, finalizó el conflicto con más de 200 personas

---

<sup>17</sup> El Nuevo País, 13.10.04, pág. 14.

que, junto a 40 niños y niñas, salieron finalmente del Internado Judicial de Mo-nagas, después del “autosequestro”. Entre los acuerdos logrados destaca la pe-tición hecha por los internos de que se respetara el artículo 46 de la Constitución referido al derecho a la integridad física, psíquica y moral de toda persona. Asi-mismo, que no se tomaran represalias contra los familiares que decidieron “au-tosequestrarse” ni contra sus niños<sup>18</sup>.

En este período, las protestas en contra de la inseguridad ciudadana volvieron a ocupar el segundo lugar entre las motivadas por DCP. Se realizaron 54 accio-nes, lo que representa el 16,6% de las protestas por DCP y el 3,75% del total general. Todas fueron pacíficas. La mitad de estas protestas, 27, fueron realiza-das por transportistas. Ejemplo de estas protestas fue la realizada el 16.03.05 por los conductores de 113 unidades de transporte de la línea Unión de Conduc-tores Amigos de San Blas, quienes durante 5 horas cerraron los accesos a Peta-re, a El Llanito, a la Avenida Río de Janeiro, avenida Francisco de Miranda y otras, en rechazo a la muerte de un conductor a “*manos del hampa*”. La víctima tripulaba un jeep cuando fue ultimado de un tiro en el pecho por tres delincuen-tes que tenían la intención de robarle la unidad<sup>19</sup>. También en el interior del país los transportistas protestaron por la falta de seguridad. El 18.07.05, taxistas de la Unión de Taxis de la Alcaldía de Zamora (Edo. Aragua) cerraron el paso por la Av. Lisandro Hernández de Villa de Cura, en protesta por la inseguridad que afecta al sector. Los taxistas llegaron a solicitar la “militarización de la ciudad” por considerar que es la única salida para acabar con la delincuencia. El deto-nante de la protesta fue el asesinato de un taxista frente a su esposa e hijos a manos de un grupo de delincuentes<sup>20</sup>.

Las protestas motivadas por el derecho a la integridad personal generaron 18 acciones (5,5%): por el derecho a la Identidad, 10 (3,1%); por el derecho a la libertad personal, 9 (2,8%); por el derecho a la libertad de expresión, 7 (2,2%), por el derecho a la vida, 6 (1,8%). El resto de las protestas estuvieron vinculadas

<sup>18</sup> El Nacional, 16.05.05, pág. B-2; Últimas Noticias, 21.05.05, pág. 20; El Universal, 27.05.05, pág. 4-20

<sup>19</sup> Últimas Noticias, 17.03.05, pág. 24

<sup>20</sup> El Siglo, 19.07.05, pág. B-16.

con demandas relacionadas con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la no discriminación por razones sexuales.

### **Organizaciones asociativas**

La intensificación de la política de la calle vivida en Venezuela en los años recientes ha estado acompañada por una creciente dinámica organizativa de la sociedad. Como ya hemos afirmado en informes anteriores, se profundiza el proceso de construcción de un tejido organizativo en los sectores populares que, apoyándose en experiencias y formas organizativas preexistentes, tienen ahora su fundamento en la Constitución de 1999, en diversos instrumentos jurídicos que la desarrollan, y en políticas públicas que en distintas áreas promueven explícitamente mecanismos de participación de las comunidades organizadas. Tal y como procedimos en informes anteriores, en este destacaremos algunos ejemplos ilustrativos de experiencias relevantes.

Durante el período siguieron creciendo las cooperativas por el énfasis que el gobierno les asigna para el desarrollo de su proyecto de democratizar la propiedad de medios de producción. Para agosto de 2005 la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) tenía registradas 83.769 en todo el territorio nacional, mientras que para agosto del año pasado había 24.433.<sup>21</sup> Ello significa un crecimiento porcentual de 242,9%. Ya en el período anterior habíamos registrado un importante crecimiento de 144%. Las cooperativas dedicadas a proveer bienes y servicios siguen siendo las de más rápido crecimiento, tanto en términos absolutos como porcentuales, al pasar del 49% en agosto del año pasado a 55% para agosto de este año. Las dedicadas a la producción agropecuaria acusan una muy ligera reducción porcentual al bajar de 32% a 30%. Sin embargo, en términos absolutos, se ha registrado un incremento notable para este tipo de cooperativas, al crearse de enero a agosto 8.375. Las dedicadas a actividades de transporte siguen disminuyendo su participación porcentual, al pasar de 11 a

---

<sup>21</sup> Ver PROVEA: Op. cit. Pág. 495.

9%. Las dedicadas a servicios sociales se mantienen en 4%, las de consumo bajaron de 3 a 2% y las de ahorro y crédito se mantienen en 1%. En cuanto a su distribución geográfica, los datos de Sunacoop indican que 9.037 funcionan en el Distrito Capital; en el Edo. Aragua, 7.015; en el Edo. Guárico, 6.747, de las cuales más de la mitad están dedicadas a tareas de producción agropecuaria (3.690); en el Edo. Miranda, 6.469; en el Edo. Anzoátegui, 6.410; y en el Edo. Carabobo, 6.122. Casi la mitad de todas las cooperativas en el país se concentran en estas 6 entidades<sup>22</sup>.

El crecimiento de estas organizaciones, positivo en sí mismo, no debe hacernos olvidar la existencia de problemas, riesgos y en algunos casos franca corrupción, por ejemplo, cuando instituciones o empresas públicas contratan cooperativas para que les provean servicios con regularidad, podrían estar contribuyendo a la tendencia hacia la precarización del trabajo, que ha sido característico del capitalismo neoliberal durante los últimos lustros. Con la contratación de cooperativas se evaden derechos y beneficios de los que gozan los trabajadores formales, tales como vacación remunerada, aguinaldos, jubilación, etc. Por otra parte, dados los considerables aportes financieros que están disponibles para las cooperativas, pequeñas y medianas empresas privadas se inscriben como cooperativas, presentando a sus empleados como socios de las mismas, pervirtiéndose el concepto de economía social sobre el cual se basan estas formas asociativas. Otra distorsión es la creación de cooperativas para obtener financiamiento público, para luego contratar personal en relación de dependencia. Un tercer riesgo es la creación de cooperativas efímeras que sólo buscan financiamiento para un proyecto puntual, pero no se estabilizan como formas de economía popular. No podemos dejar de mencionar un cuarto riesgo, que es el de la corrupción. Para intentar enfrentar estos peligros, el superintendente nacional de cooperativas, Carlos Molina, anunció la puesta en marcha de un plan de fiscaliza-

---

<sup>22</sup> SUNACOOOP [en línea] <[http://www.sunacoop.gob.ve/Estadisticas/estadisticas\\_agos\\_05.html](http://www.sunacoop.gob.ve/Estadisticas/estadisticas_agos_05.html)>

ción que busca la transparencia en el funcionamiento de este modelo productivo<sup>23</sup>.

Según datos de la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana (OTNRRTU)<sup>24</sup>, existen hasta la fecha, 5.922 Comités de Tierra Urbana (CTU)<sup>25</sup>, los cuales están organizados en una red que tiene presencia en la mayor parte de los barrios de las grandes ciudades del país, cubriendo en su acción a una población cercana al millón de familias<sup>26</sup>. Hasta agosto de 2004 esta oficina tenía registradas 3.609 CTU, lo que implica un aumento aproximado de 64%.

Otro caso destacado son las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y los Consejos Comunitarios de Agua (CCA), que a lo largo de este período siguieron desarrollándose, llegando a cubrir hoy todo el territorio nacional<sup>27</sup>. Dado el éxito de esta modalidad organizativa en el objetivo de dinamizar la participación de las comunidades en la resolución de los problemas de suministro y saneamiento de agua, en este período se han comenzado a impulsar el desarrollo de modalidades similares para la solución de otros servicios y/o necesidades. Tal es el caso de las nuevas Mesas de Energía, cuyo objetivo es cubrir las necesidades, tanto de energía eléctrica como de instalación de tuberías para el suministro de gas doméstico en barrios populares urbanos. El 04.10.05, en un acto realizado en el Teatro Municipal de Caracas, televisado por VTV, con la presencia del alto gobierno y comunidades organizadas, el presidente de Cadafe informó de la constitución de las primeras 211 mesas de esta naturaleza.

---

<sup>23</sup> SUNACOOOP: *Sunacoop profundiza vigilancia en las cooperativas* [en línea] <[http://www.sunacoop.gob.ve/sunacoop\\_profundiza\\_vigilancia.html](http://www.sunacoop.gob.ve/sunacoop_profundiza_vigilancia.html)> 15.09.05.

<sup>24</sup> Organismo adscrito a la Vicepresidencia, creado por el decreto 1.666 del 04.02.02, el cual norma los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana, y tiene como una de sus funciones el registro de los Comités de Tierra constituidos.

<sup>25</sup> Expresiones de organización social, cuyo objetivo es la transformación integral del hábitat.

<sup>26</sup> ANTILLANO, Andrés: *La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas* en: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol 11, N° 3, pp. 207-220.

<sup>27</sup> Dato proporcionado por Santiago Arconada Rodríguez, promotor comunitario del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Caracas, 13.10.05.

Las organizaciones de mujeres siguen muy activas y creciendo numéricamente. Ejemplo de esto son organizaciones como el colectivo Mujer Tenía que Ser, el Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (mujeres del partido Patria Para Todos, mayoritariamente del Edo. Miranda) y el Movimiento Josefina Joaquina Sánchez (mujeres del partido Movimiento Quinta República, Edo. Vargas). Estas organizaciones se identifican como “*cercanas pero críticas*” al proceso liderado por el presidente Chávez. Las organizaciones de mujeres de oposición no han tenido en este período mayor crecimiento numérico, pero se mantienen activas el Frente Nacional de Mujeres, y Mujeres Democráticas Unidas, encabezadas por Isabel Carmona y Adicea Castillo, respectivamente. Estas organizaciones de mujeres han logrado trabajar conjuntamente en este período alrededor de varias actividades, como la continuación del seguimiento del caso de violencia doméstica sufrida por Linda Loaiza López y la iniciativa de introducir en la discusión de la reforma del Código Penal la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, daño fetal y peligro de vida de la madre. Por primera vez en Venezuela esta iniciativa suscitó un amplio debate sobre el tema, que puso en evidencia diferencias importantes en la sociedad venezolana alrededor de este, lo que terminó con la paralización de la reforma. Las organizaciones de mujeres también continuaron su lucha contra la eliminación de las medidas cautelares que protegen a la mujer violentada y a sus hijos. Una lucha, que fracasó en este período, fue el reclamo de militantes femeninas, tanto de partidos oficialistas como de oposición, para que sus respectivas organizaciones políticas atendieran las recomendaciones del Consejo Nacional Electoral de elaborar las listas para las elecciones de octubre de 2004 y diciembre de 2005 con una representación paritaria y alternada de hombres y mujeres<sup>28</sup>.

El 21.01.05 se realizó en Los Caracas, Edo. Vargas, el 4º Encuentro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), congregando a más de 560 personas representantes de más de 250 colectivos co-

---

<sup>28</sup> Datos proporcionados por la profesora Gioconda Espina del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, septiembre de 2005.

municacionales de 19 entidades del país. El encuentro buscaba definir una agenda de trabajo común. Esta organización fue creada en junio de 2002 con la realización del Primer Encuentro que reunió a unas 20 personas, lo que pone de relieve el notable crecimiento que ha tenido esta forma organizativa. Desde su fundación, su propósito ha sido superar los obstáculos que enfrentan los medios comunicacionales comunitarios, entre ellos, la escasez de recursos y el ataque de los grandes medios comerciales. La AMNCLA propicia la creación de nuevos medios en las comunidades y la democratización del espacio radioeléctrico nacional, entre otros objetivos. Son enfáticos en preservar su independencia y autonomía frente al Estado y el gobierno bolivariano, aunque reconocen que coinciden con orientaciones del actual gobierno y que el auge que viven se debe parcialmente a apoyos oficiales que han recibido. En este encuentro se constituyeron equipos nacionales de trabajo para desarrollar actividades tales como la Escuela de Comunicadores Populares, la Agencia de Noticias Alternativas y La Cooperativa de Imprentas Populares y Distribución de Papel, entre otros proyectos<sup>29</sup>.

Este intenso proceso organizativo en los sectores populares, del que este Informe solo muestra algunos ejemplos, no es resultado únicamente de la acción e incentivos de las políticas públicas. Con frecuencia, es fruto de anteriores procesos históricos de lucha popular. Al respecto, una entrevista que realizamos a Edgar y Francisco Pérez, padre e hijo, ambos activistas sociales de la parroquia de La Vega en Caracas, revela las vinculaciones que se establecen entre viejas y nuevas luchas. Como habitantes de Las Casitas de La Vega desde su fundación entre 1977 y 1978, relataron cómo se fue desarrollando la dinámica organizativa de esa comunidad por el conjunto de necesidades básicas que debían satisfacer. Para ellos, muchas de las políticas que hoy impulsa el gobierno bolivariano, como las mesas técnicas de agua o los infocentros, fueron ya planteadas en la década de los 90 por las organizaciones populares. En tal sentido, el

---

<sup>29</sup> APORREA: *No somos medios, somos completos. 4to. Encuentro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos* [en línea] <<http://www.aporrea.org/dameletra.php?docid=11834>> y Documento del 4to Encuentro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos, Los Caracas, 24.01.05, mimeo.

gobierno del presidente Chávez no es el “*padre de este proceso*” sino que es más bien su “*hijo*”. Al igual que como se señaló ya con relación a la ANMCLA, la agrupación cultural Caribes de Itagua, fundada en esta comunidad en los años 80, reclama y defiende su independencia y autonomía. En este sentido, mantiene una relación atenta y vigilante ante el llamado “*proceso*”. Los entrevistados explicaron cómo se mantiene una tensión entre organizaciones comunitarias y funcionarios y/u otras organizaciones populares que se van fundando a través de iniciativas del gobierno para implementar las distintas misiones. Para los entrevistados, está claro que debe ser la comunidad quien en definitiva debe decidir cómo han de gestionarse las diversas organizaciones sociales. En su experiencia, estas distintas formas organizativas cuentan con la participación de los mismos activistas de la comunidad, y dependiendo de las coyunturas específicas, algunas formas adquieren más visibilidad y vigor que otras. Todas deberán llevar, según los entrevistados, a los Consejos Locales de Planificación. Por otra parte, también pusieron de relieve la escasa vinculación e interés que las organizaciones políticas que apoyan al gobierno de Chávez tienen con este complejo y rico proceso sociopolítico.